

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

**Primero:** Que comparece el abogado don Ernesto Núñez Parra, en representación de Comercial y Entretenimientos Acero Amargo SPA., RUT N° 76.324.324-9, representada por don Carlos Moya Cea, empresario, con domicilio en Radal N°1995, comuna de Quinta Normal, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio del Interior, del año 2006, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, e interpone recurso de ilegalidad en contra de una omisión de la Municipalidad.

Explica que con fecha 10 de noviembre de este año, solicitó a la requerida patente provisoria por el giro de *“juegos de habilidad y destreza”*, no habiendo obtenido respuesta. El 16 de diciembre ingresó a la oficina de partes un Reclamo de Ilegalidad por tal omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud ingresada, de la cual no se obtuvo respuesta.

Cuenta que desde principios del mes de octubre intentó tramitar patente para operar juegos de habilidad y destreza. Para lo cual ha remitido a la recurrida todos los antecedentes necesarios para cumplir con los requisitos para que se otorgue la patente y permitir el ejercicio de la actividad.

Señala que una vez aprobados los requisitos que exige el artículo 26 del D.L. 3063, que regula la “Ley de Rentas Municipales”, la Municipalidad debe otorgar la patente provisoria, ya que no se trata de una actividad económica que requiera una autorización sanitaria o bien otras autorizaciones exigidas por leyes especiales.



Una postura distinta se convierte en una omisión dolosa que incluso podría configurarse en la hipótesis de falta de servicio, ya que cada mes que pasa importa que debe pagar y soportar gastos de inversión, de personal y asesorías para poder llevar a efecto su negocio. La municipalidad no ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19.880, que fija el principio conclusivo de los actos de la administración del Estado.

Además, hay que tener presente que cualquier discusión técnica que se requiera para el convencimiento de la autorización de una patente definitiva no puede obstaculizar el aprobar una patente provisoria, menos cuando la actividad económica que se pretende desarrollar no se encuentra ni en la hipótesis de un permiso sanitario, ni tampoco le es aplicable un estatuto de ley especial que debiera dar cumplimiento.

Sin embargo, el recurrido pretende establecer una figura jurídica sui generis, al intentar que la Superintendencia de Casinos de Juegos (en adelante SCJ), intervenga en esta etapa de la tramitación de la patente, apartándose del sentido y alcance que le ha dado el Dictamen N° 92.308 de 23 de Diciembre de 2016, que estableció a la SCJ como un órgano consultor ante la duda que manifieste un Municipio al momento de aprobar una patente definitiva, y no una patente provisoria.

La actuación de la municipalidad no se ajusta al principio de legalidad propios de la Administración Pública, conculcándose los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna.

Arguye que el Dictamen 92.308 de 23 de diciembre de 2016 lo que hizo fue “uniformar” el procedimiento de obtención de la patente definitiva nueva de juegos de habilidad y destreza. Así, el municipio



frente a la solicitud de patente nueva sobre este giro tiene dos opciones: formarse la propia convicción de que se trata de un juego que no es de azar, o bien, si generaba dudas acudir a la SCJ como organismo consultor.

La conducta desplegada por la recurrida pone a la SCJ en un plano superior, cuando solo se trata de un organismo consultor y ni siquiera fiscalizador. La municipalidad como órgano autónomo se rige por una Ley Orgánica Constitucional, en cambio a la SCJ solo se le entregan facultades mediante una simple ley.

El actuar del reclamado conculca principios elementales de la Administración Pública, a saber, celeridad, conclusivo y oportunidad, contenidas en la ley N° 19.880; y contraviene directamente, lo dispuesto en el artículo 26 inciso segundo de la Ley de Rentas Municipales, por el cual *“La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes”*.

También se atenta con lo prescrito en los artículos 6, 7 y 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Primero en cuanto viola el principio de legalidad de los Órganos de la Administración del Estado, toda vez que la conducta de la Municipalidad omite las normas sobre adecuada coordinación y competencia de los Organismos del Estado, transgrediendo normas de derecho público sobre la materia; y de acuerdo a los artículos 19 N° 21 y 22 de la Carta Magna, su conducta conculca la garantía a emprender o libertad de industria, al dotar y empoderar arbitraria y



desproporcionadamente a la SCJ para la autorización de una patente provisoria, concediéndole mayores atribuciones.

El actuar del Municipio se traduce en la ejecución de un acto administrativo contrario a las normas pertinentes del ordenamiento jurídico. En efecto, la resolución de 12 de noviembre de 2020, viola el principio de legalidad de los Órganos de la Administración del Estado, contenido en el artículo 6° de la CPR el que se entiende como *“La actividad de la Administración de estar permanentemente sujeta al orden jurídico, esto es, que las normas que ella expida y los actos que realice no vayan en contra de las reglas jurídicas superiores”*. El principio de legalidad funciona entonces como un mecanismo de control de la administración. El principio de juridicidad, que obra y descansa en el artículo 7° de la CPR, se define como *“La sujeción integral a Derecho de los órganos del Estado tanto en su ser como en su obrar”*.

El profesor Eduardo Soto Kloss, señala que el principio de juridicidad supera al de legalidad en el sentido que el primero comprende el Derecho en toda su ordenación jurídica y no solo a una de sus manifestaciones que es la ley. Por tanto, comprende la Constitución, actos administrativos, dictámenes de la Contraloría, tratados internacionales, etc. Tanto el principio de juridicidad como el de legalidad se encuentran respectivamente contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Pues bien, no sólo dichas garantías constitucionales son conculcadas, sino también, el derecho de propiedad sobre intangibles, esto es, el derecho adquirido sobre una actividad reconocida por la Municipalidad mediante sus actos propios, que luego desconoce. También se vulnera el derecho del actor para ejercer una actividad



económica, al impedirle sin argumentos concretos y totalmente contradictorios, el derecho que tiene sobre una patente comercial.

Indica que la omisión que se reclama es ilegal pues infringe los preceptos de la Ley N° 18.575, que en su artículo 3° descansa uno de los principios fundamentales inspiradores para los órganos administrativos, en virtud del cual se expresa que: *“Artículo 3°. La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes”*.

La omisión que se reclama carece de toda la inspiración filosófica que el legislador, ha querido impulsar en el orden legal como derecho público, dado que al desconocer el municipio requerido un derecho que legítimamente había adquirido el recurrente, echa por tierra, incluso, los principios más importantes del derecho como lo es el principio de certeza jurídica.



El acto impugnado contraviene lo dispuesto en el artículo 63 inciso segundo de la Ley de Rentas Municipales, norma que expresa: *“La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes”*.

En el orden administrativo, el Dictamen 92.308, de 23 de diciembre de 2016, uniformó el procedimiento de obtención de una patente definitiva nueva de juegos de habilidad y destreza. Para tal evento, el Municipio frente a la solicitud de patente nueva sobre este giro, solo puede formarse la propia convicción de que se trata de un juego que no es de azar, o bien, si tiene dudas, debe acudir a la SCJ como organismo consultor.

La conducta desplegada por la Municipalidad en cuestión, pone a la SCJ en un plano superior, cuando solo se trata de un organismo consultor y ni siquiera fiscalizador, dado que la ley N° 19.995 le entregó su ámbito de competencias y claramente no es este giro.

Por lo anterior, pide tener por interpuesto el presente recurso de ilegalidad en contra de la omisión de pronunciamiento de la solicitud de patente provisoria, para que se ordene a la Municipalidad de Quinta Normal adecuar su conducta a derecho, y en definitiva se le conceda la patente provisoria.

**Segundo:** Que la Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal, doña Carmen Gloria Fernandez Valenzuela, solicitó el rechazo de la presente acción de legalidad.

Explica que a la recurrente se le otorgó la Patente Municipal N° 210067, Juegos Electrónicos, Bebidas y Confites, en el inmueble



ubicado en calle Radal N1995, comuna de Quinta Normal. Por Decreto N° 643/2020, de 18 de junio del año 2020, no se renovaron las patentes de ese origen, por cuanto mediante Dictamen N° 25712 de la Contraloría General de la Republica, (en adelante CGR), de 27 de septiembre del 2019, se dispuso que corresponde "... a las municipalidades del país, la obligación de verificar que las máquinas que se estén explotando efectivamente en un establecimiento comercial amparado por una patente municipal, sean de habilidad y destreza ...". Por lo anterior, sólo para efecto de dar a conocer el dictamen ya mencionado, la Subdirección de Rentas y el Departamento de Patentes Municipales entregó una Carta de Compromiso, para que los titulares de tales patentes, tomaran conocimiento del referido dictamen. Dicha misiva fue entregada por funcionarios municipales el 06 de febrero de 2020, a quienes no la habían retirado desde el municipio. Además, se les indicó que debían asistir al Departamento de Patentes a retirar un oficio que remitió la SCJ, para continuar con la tramitación del Informe de Calificación Técnica de las máquinas de juegos explotados.

Agrega que la recurrente fue notificada el 08 de enero de 2021, del procedimiento que se debía seguir para la obtención de la patente comercial.

Indica que no procede el ingreso mediante Carta por Oficina de Partes para la obtención de una patente Municipal, sino que se debe iniciar el trámite ante el Departamento de Patentes Municipales, en un formulario que existe para ese efecto, lo que es de conocimiento de los reclamantes, ya que ellos tenían una patente sobre el mismo giro, en el mismo local comercial, la que no fue renovada mediante



Decreto N°643/2020. Sin perjuicio de ello, igual se les notificó que debía dirigirse a la SCJ, para cumplir lo señalado.

Cabe hacer presente, que según Dictamen N° 20434 de 2019, la CGR determinó "No procede otorgar patente comercial provisoria que ampare la explotación de máquinas electrónicas de juegos, mientras no se determine que la actividad que se trata es lícita."

Señala que mediante Dictamen N 25.712 de 27 de septiembre de 2019, la CGR dispuso "En relación con la explotación de máquinas electrónicas de juego, cabe recordar que la actividad de juegos de azar es, por regla general, ilegal, y está tipificada como delito en nuestra legislación. Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 63, N° 19, de la Constitución Política, 1.466 y 2.259 del Código Civil, y 277, 278 y 495, N° 14, del Código Penal."

"De este modo, las máquinas electrónicas de juegos de azar solo pueden ser explotadas en los casos expresamente autorizados por la ley, tal como acontece con aquellas que funcionan en los casinos de juego autorizados en virtud de la ley N° 19. 995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los mismos."

En el mismo sentido, el dictamen N° 92.308, de 2016, al referirse a la explotación de máquinas de juego por personas o entidades distintas a los casinos de juego, ha precisado que los municipios sólo pueden otorgar patentes para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento que no sean susceptibles de ser calificadas como juegos de azar.

Respecto del pronunciamiento para resolver si se está ante un juego de azar los municipios deben, en primer término, considerar el catálogo de juegos previsto en el artículo 3°, letra b), de la ley N°



19.995, aprobado por la Superintendencia. En el caso que el municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar contemplado en ese catálogo, debe coordinarse con la SCJ a fin de que esta emita un informe definiendo tal aspecto.

También expresa que si se determina que la máquina de juego que se pretende explotar no se encuentra en el mencionado catálogo, el municipio deberá solicitar al interesado que acompañe un informe de la SCJ en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser allí registrada, por no tener la naturaleza de juego de azar, caso en el cual la entidad edilicia podrá acceder a la autorización requerida.

Si bien el dictamen N° 92.308, de 2016, indicó que tal criterio regiría hacia futuro y no afectaría a las patentes municipales ya otorgadas, ello en caso alguno puede entenderse como una exención de requisitos al momento de renovarlas, sino que dicho pronunciamiento solo tuvo por finalidad ampararlas por el correspondiente periodo de vigencia.

Lo anterior, atendido que el ejercicio de actividades económicas ilícitas, como es la explotación de máquinas de juego de azar fuera de un casino de juego, no podría ser protegido por la autoridad a través de la renovación de una patente municipal

Así, considerando que si bien el otorgamiento de una patente municipal habilita al respectivo contribuyente para ejercer una determinada actividad económica durante el período por el que ha sido autorizada, y que su vigencia depende de si se mantiene el cumplimiento de los requisitos que habilitaron su aprobación, resulta necesario revisar la situación al momento de su renovación.

Por otro lado, cabe tener presente que según el inciso segundo del artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas



Municipales, la Municipalidad está obligada a otorgar la correspondiente patente en forma inmediata, una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos solicitados, o la entidad edilicia hubiere verificado por otros medios su cumplimiento, esto es, que se trate de una actividad lícita.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa de la CGR, contenida en los dictámenes N°. 79.451, de 2016, y 7.216, de 2018, entre otros, ha sostenido que la renovación de una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento.

De este modo, respecto de las patentes otorgadas con anterioridad a la emisión del citado dictamen N° 92.308, de 2016, cuando el municipio no tenga la certeza acerca de la licitud de la respectiva actividad, para su renovación por un nuevo período, debe cumplir con todos los requisitos exigibles para su otorgamiento, entre los cuales se encuentra precisamente el de la licitud de la actividad que se pretende amparar

Lo anterior supone la verificación, por parte de la autoridad, de que las máquinas sean de destreza y no de azar, en conformidad con lo expresado en el mencionado dictamen.

El incumplimiento de dicho requisito, impedirá que el municipio respectivo autorice el ejercicio de la correspondiente actividad por un nuevo periodo u otorgue una nueva patente.

En síntesis, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, las municipalidades tienen el imperativo de verificar que las máquinas que se estén explotando en un establecimiento comercial amparado



por una patente municipal, cumplan con los requisitos exigidos por los dictámenes de la CGR ya mencionados.

En cuanto al derecho, de acuerdo al inciso segundo del artículo 26 del DL N° 3.063, de 1979, la municipalidad está obligada a otorgar la correspondiente patente en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos solicitados o la entidad edilicia hubiere verificado por otros medios su cumplimiento.

A su vez, su inciso quinto mandata que la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso".

En cuanto a la explotación de máquinas electrónicas de juego, cabe recordar que la actividad de juegos de azar es, por regla general, ilegal, y está tipificada como delito en nuestra legislación. Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 63 N° 19 de la Constitución Política, 1.466 del Código Civil, 277 y 495 N° 14 del Código Penal.

En síntesis, las máquinas electrónicas de juegos de azar solo pueden ser explotadas en los casos expresamente autorizados por la lev.\_



En igual sentido, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el citado dictamen N° 92.308, de 2016, al referirse a la explotación de máquinas de juego por personas o entidades distintas a los casinos de juego, ha precisado que los municipios sólo pueden otorgar patentes para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento que no sean susceptibles de ser calificadas como juegos de azar.

Agrega dicho pronunciamiento que para resolver si se está ante un juego de azar los municipios deben, en primer término, considerar el correspondiente catálogo de juegos aprobado por la Superintendencia. En el caso que el municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar previsto en ese catálogo, debe coordinarse con la Superintendencia a fin de que esta emita un informe definiendo tal aspecto.

Lo anterior, por cuanto las municipalidades deben velar, en lo que interesa, por la licitud de las actividades cuyo ejercicio autoricen, por lo que no cabe sino concluir que para el otorgamiento de una patente que ampare el funcionamiento de las máquinas en comento, la autoridad edilicia debe tener el absoluto convencimiento de que corresponden a máquinas de destreza o habilidad y no de azar, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 N° 19 de la Constitución Política y 5 de la Ley N° 19.995, en virtud de las cuales el funcionamiento de aquellas máquinas solo se podrá autorizar en los casinos de juego amparados por el correspondiente permiso de operación.

Tal certeza constituye, entonces, el presupuesto básico de la respectiva autorización, de manera tal que el pertinente informe de la Superintendencia solo es parte del mecanismo que el ordenamiento



jurídico contempla para que la autoridad alcaldicia pueda formarse dicho convencimiento y, en definitiva, actuar en cumplimiento de la ley.

De esta manera, no verificándose uno de los requisitos fundamentales para la autorización de la actividad en cuestión, a saber, su calificación como lícita, no procede el otorgamiento de la patente municipal, sea esta definitiva o provisoria, que ampare su ejercicio.

En síntesis, agrega que el actuar de la entidad edilicia jamás ha sido caprichoso, sino que se ha ceñido a la norma legal y lo determinado por la CGR, en los dictámenes singularizados.

En relación a las garantías alegadas por el actor como infringidas, la establecida en el N° 21 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, implica el derecho a realizar y desarrollar cualquier actividad económica, la municipalidad ha sido respetuosa en otorgar y velar por el cumplimiento de la ley, por este motivo se le otorgó una patente municipal, y es el recurrente quien infringe la ley al no realizar la gestión administrativa en cumplimiento a dictámenes de la CGR y el procedimiento establecido por la SCJ, por este motivo dicha patente no le fue renovada en su oportunidad, así como tampoco le fue otorgada una nueva.

De modo que la recurrida actuó en cumplimiento a los diversos dictámenes de la CGR, los cuales son vinculantes para ella.

Por lo tanto, el recurrente no puede sentirse amenazado en el ejercicio de los derechos que les conceden las patentes municipales, en la medida que realicen efectivamente las actividades legítimas y los procedimientos que se han establecido para su renovación u otorgamiento por las entidades competentes.



Finalmente expone, que al recurrente se le respondió su solicitud de renovación de patente, y si bien existió una demora en la respuesta, fue por la situación de pandemia que vive el país. Sin embargo, hay que tener presente, que los antecedentes presentados por el interesado no eran los correctos, ya que ingresó un contrato de arrendamiento de un local comercial de la comuna de Quilicura y no de Quinta Normal. También en su reclamo, no hizo mención a que su empresa ya tenía una patente municipal sobre el mismo giro, que no se le renovó, y que fue informado de los procedimientos que se deben realizar en la Superintendencia.

Advierte que de acuerdo a los dictámenes N° 79.451, de 2016, y 7.216, de 2018, la CGR, ha sostenido que la renovación de una patente comercial por un nuevo periodo, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Por este motivo, el contribuyente en primera instancia no cumplió uno de los requisitos para la renovación de la patente que tenía, ya que la entidad edilicia inició el proceso de verificación de la solicitud de la actividad de dichos contribuyentes de la comuna, el primer semestre del año 2020. Y posteriormente en su presentación de noviembre de ese año, tampoco da cumplimiento al procedimiento establecido.

Por lo anterior, pide el rechazo de la acción deducida, con costas.

**Tercero:** Que al informar el Fiscal Judicial, indica que si bien la reclamante endereza su acción en contra de la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de patente y posterior silencio administrativo negativo, las alegaciones que se contienen en su



presentación demuestran un cabal conocimiento de las razones por las que el ente edilicio no le otorgó la patente que pretende, esto es, para el giro de explotación de juegos de habilidad y destreza.

Indica que respecto a la omisión reprochada, conforme el documento denominado “carta respuesta de diciembre de 2020”, la misma ha sido superada por la reclamada, desde que –aunque tardíamente- respondió a la recurrente, señalándole que: “... *previo a resolver, deberá contar y presentar un informe técnico, de la Superintendencia de Juegos y Casinos que indique claramente que las máquinas a explotar son de Habilidad y Destreza ...*”, motivo por el que se desestima la pretendida vulneración del artículo 8 de la Ley N° 19.880, acusada en el arbitrio que se examina.

En cuanto a la infracción del artículo 26 de la Ley de Rentas, en cuanto dispone: “*Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: ...*”, resulta improcedente el otorgamiento de dicha patente provisoria, en la medida que corresponde a la Municipalidad velar por la licitud de los giros que autoriza a desempeñar por los particulares y, en el caso, asiste la duda razonable, de manera que mientras no exista la certeza absoluta de que la actividad que intenta desarrollar la reclamante, es lícita, no corresponde otorgar la patente solicitada.

En efecto, del Reporte de Evaluación del Juego, elaborado por el Laboratorio BMM TestLabs, incorporado consta que “el usuario realiza apuestas y obtiene ganancias” y, en ningún caso, se certifica que no corresponde a un juego de azar, a lo que se une que, en la parte general de dicho Reporte, se establece que “podrían aplicar restricciones regulatorias o estar sujeto a aprobación por parte del



regulador”, elementos que inducen a obtener el informe técnico del órgano técnico especializado, considerando además, la definición de "juegos de azar" contenida en la letra a) del artículo 3° de la Ley N° 19.995, esto es: aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos.

Sobre la base de lo consignado, el Municipio no ha trasgredido los artículos 6, 7 y 19 Nos. 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, el que antes de resolver sobre el otorgamiento de la patente, ha decidido acatar el dictamen de la CGR, por lo demás vinculante para tal entidad edilicia. A ello se une que la Superintendencia de Casinos de Juegos se yergue como el órgano técnico competente en la materia.

Finalmente señala que el Reporte de Evaluación, si bien es emitido por un ente reconocido por la Superintendencia, no sustituye la certificación respectiva y que la demora en la gestión también puede atribuirse a la reclamante, quien conocía desde la no renovación de su anterior patente, la necesidad de la certificación que ahora discute.

Por las razones expresadas, la Fiscalía Judicial es de parecer de rechazar la presente acción de ilegalidad.

**Cuarto:** Que la presente acción de reclamo de ilegalidad se ha deducido en contra de la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido la Municipalidad de Quinta Normal, respecto de una solicitud de patente provisoria pretendida por la acora.

**Quinto:** Que son hechos no controvertidos los siguientes:



**A.-** Que con fecha 9 de noviembre de 2021, Comercial y Entretenimientos Acero Amargo SPA., RUT N° 76.324.324-9, en el marco de una solicitud de patente nueva, solicitó a la Municipalidad recurrida, mediante carta presentada en la Oficina de Partes, autorización de patente provisoria, para desarrollar el giro comercial explotación de juegos de habilidad y destreza, no obteniendo respuesta del ente municipal.

**B.-** Que con fecha 16 de diciembre pasado, la actora ingresó a la Municipalidad de Quinta Normal un reclamo de ilegalidad por la omisión referida en la letra anterior.

**C.-** Que la citada Municipalidad, en forma tardía, mediante misiva de Diciembre de 2020, comunicó a la actora que previo a resolver la solicitud de patente comercial para la explotación de la actividad juegos, deberá presentar un informe emitido por la SCJ, que indique que las máquinas para llevar a cabo la actividad anterior, son de habilidad y destreza.

**D.-** Que mediante carta suscrita por don Ricardo Alarcón Alarcón, Administrador Municipal de la recurrida, fechada en diciembre de 2020, dirigida al abogado patrocinante del presente recurso, don Ernesto Núñez Parra, se le informó que para resolver la petición de autos, deberá “constar y presentar un Informe Técnico, de la Superintendencia de Juegos y Casinos, que indique claramente que las máquinas a explotar son de Habilidad y Destreza.”.

**6°.-** Que para una adecuada resolución de la acción deducida en autos hay que tener presente las siguientes normas legales y dictámenes de la CGR:

**A.-** Artículo 26 inciso segundo y quinto del DL 2.363, sobre Rentas Municipales: “La municipalidad estará obligada a otorgar la



patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad.”. (Inciso segundo). “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.”. (Inciso quinto).

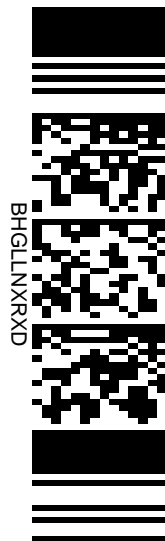
**B.-** Artículo 5 inciso tercero de la Ley 19.995, que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, dispone que: “Los juegos de azar a que se refiere esta ley y sus reglamentos sólo se podrán autorizar y desarrollar en los casinos de juego amparados por el correspondiente permiso de operación, según se establece en las disposiciones siguientes. En ningún caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea.”.



**C.-** Dictamen 20434 de 2019, de la CGR: En lo pertinente determinó que “Aceptar que el municipio otorgue una patente, aun cuando solo sea provisoria, sin verificar previamente que las respectivas máquinas electrónicas efectivamente no sean de azar, implicaría que eventualmente la autoridad edilicia estaría autorizando el ejercicio de una actividad ilícita, lo que no resulta admisible.”.

**Séptimo:** Que le corresponde a las Municipalidades velar que la actividad consistente en la explotación de las máquinas electrónicas de juego, se verifique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 inciso tercero de la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, referida en el literal B) del motivo anterior, por lo tanto, tales entes tienen la obligación de fiscalizar que dicha actividad se verifique dentro del marco legal, por ende, para otorgar la respectiva patente, ya sea provisional o definitiva, que ampare su explotación, deberán cerciorarse que se trate de máquinas de entretenimiento, esto es, de habilidad o destreza, y no de azar, ya que las que tienen esta característica, solo pueden ser explotadas por lo casinos de juegos, debidamente autorizados.

**Octavo:** Que, en consecuencia, la presente acción no puede prosperar, por cuanto la omisión negativa que se le imputa a la autoridad recurrida, fue salvada por ésta, aunque en forma tardía, mediante misiva dirigida al abogado del recurrente, tal como se consignó en el literal D) del fundamento 5° de este fallo, al notificársele que para resolver la petición de otorgamiento de patente para la explotación de máquinas de juegos, deberá acompañar “un Informe Técnico, de la Superintendencia de Juegos y Casinos, que indique claramente que las máquinas a explotar son de Habilidad y



Destreza.”. La conducta del ente edilicio, por lo demás se ajusta plenamente con los distintos dictámenes emitidos por la CGR, los que se citan en el informe emitido por la Municipalidad requerida.

Por tales fundamentos y citas legales, se **RECHAZA**, con costas, el reclamo de ilegalidad municipal deducido por el abogado don Ernesto Núñez Parra, en representación de Comercial y Entretenimientos Acero Amargo SPA., en contra de la omisión del Departamento de Rentas Municipales y del silencio negativo de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, representada por su Alcaldesa, doña Carmen Fernández Valenzuela, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva acerca del otorgamiento de la patente de que se trata.

**Regístrese y notifíquese.**

Redacción del Ministro Sr. Carreño.

No firma el señor Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

No firma el señor Asenjo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

**N°Contencioso Administrativo-42-2021.**



Proveído por el Señor Presidente de la Quinta Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.